



NUE 194-A-2019 (AC)

Ávalos Quinteros contra Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de junio de dos mil veinte.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Jessica Del Carmen Ávalos de Quinteros**, en adelante “la apelante”, en contra de la resolución emitida por la oficial de información interina de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, bajo la referencia SIP-466-2019.

Descripción del caso

I. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, **Jessica Del Carmen Ávalos de Quinteros** presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **CSJ**, una solicitud de información, en la que requirió información concerniente a: “i) declaración patrimonial de toma y cese de funciones de Nayib Armando Bukele cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán para el periodo 2012-2015; ii) declaración patrimonial de toma y cese de funciones de Nayib Armando Bukele cuando fungió como alcalde de San Salvador para el periodo 2015-2018; iii) declaración patrimonial de Nayib Armando Bukele de toma de posesión como presidente de la República a partir del 1 de junio de 2019; y, iv) versión pública de las adendas presentadas por Nayib Armando Bukele ante la Sección de Probidad durante el examen patrimonial realizado por esa oficina”.

La oficial de información interina de la **CSJ**, resolvió entregar los primeros tres requerimientos, denegando el cuarto. Dicha decisión la fundamentó en la clasificación de reserva tomada por el Pleno de ese ente obligado, con base al acuerdo contenido en el acta celebrada el día 20 de junio de 2017, por un plazo de 7 años, y por la causal del art. 19 letra “e” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

En ese contexto, la apelante interpuso el presente recurso de apelación, fundamentando su inconformidad en que lo solicitado en el requerimiento cuarto hace referencia a un caso en el cual ya se emitió resolución definitiva por parte de la **CSJ**, y la entrega de la misma no entorpece ninguna deliberación. El recurso fue admitido por este Instituto, se designó al Comisionado **José Alirio Cornejo Najarro** para su instrucción, delimitando el objeto de conocimiento a la información relativa a: “versión pública de las adendas presentadas por Nayib Armando Bukele ante la Sección de Probidad durante el



examen patrimonial realizado por esa oficina”. Asimismo, en garantía de los derechos constitucionales que le asisten a la persona jurídica de derecho público, se requirió su informe de justificación conforme con art. 88 de la LAIP.

II. Durante la etapa de instrucción, la CSJ a través de su apoderada, Eva Marcela Escobar Pérez, rindió el informe de justificación, en el que manifestó que apegó su argumento al criterio adoptado por el Pleno de la CSJ para el caso NUE 124-A-2018; es decir, que la reserva radica en que hay información bancaria, financiera, contable y patrimonial del funcionario o empleado público obligado a declarar. Por otro lado, manifestó que por decisión de Corte Plena no se puede entregar aquella información en la que no se haya declarado indicios por enriquecimiento ilícito. Además, sustentó que esto es por aplicación directa de la Constitución en su art. 240.

Posteriormente, alegó la prejudicialidad del caso pues manifestó que la petición que nos ocupa en el presente caso, está relacionada con la información que ya está comprendida en el expediente de apelación de referencia 124-A-2018.

Finalmente, en su informe, la CSJ ofreció la siguiente prueba documental:

a) Copia certificada del informe suscrito por el Subjefe de la Sección de Probidad de la CSJ, con referencia 208-2019-SP de fecha 13 de junio de 2019 con el que se pretende probar que la información requerida en el presente caso es la misma contenida en el expediente 124-A-2018.

b) Copia certificada del punto de acta de sesión de Corte Plena de fecha 24 de septiembre de 2019, con el cual se pretende acreditar la postura institucional de defensa del presente caso, instrucciones que fueron emitidas por el Pleno de la CSJ.

c) Copia del memorándum con referencia Im/160/S.G./2019, de fecha 8 de agosto de 2019, suscrito por la Secretaría General de la CSJ, a través del cual remite el acuerdo emitido por el Pleno de la Corte el día 8 de agosto de 2019, con el cual se pretende comprobar la posición de la CSJ en el que se ordenó entregar la información que está solicitando la apelante.

d) Copia de la resolución emitida por la CSJ el día 8 de agosto de 2019, agregada a folios 20 al 22, con la que se pretende probar las razones expuestas por el Pleno de esa Corte, las cuales son las mismas que se reiteran en el presente caso.

Sobre la prejudicialidad alegada por la CSJ, el Instituto analizó que en ambos casos se solicitan versiones públicas, relacionadas con el tema de enriquecimiento ilícito; sin embargo, tal como se explica en el informe de actualización invocado por el ente obligado (Fs. 56 y 57 del expediente NUE 124-A-2018),

el procedimiento establecido se divide en dos fases: una administrativa y otra jurisdiccional, explicando que la fase administrativa está a cargo de la CSJ. Entonces, en esta fase se realizan una serie de actuaciones, tanto por la Sección de Probidad como por el (la) funcionario (a) declarante. La principal responsabilidad para la parte declarante es, presentar su declaración; no obstante, también se presentan adendas o actualizaciones a esta. Por otro lado, la Sección de Probidad realiza gestiones y emite informe, debiendo también emitir adenda o actualización de informe, según las pruebas de descargo que puedan presentarse.

Aclarado lo anterior, se evidenció que los objetos de ambos procedimientos sí responden a una misma competencia de la CSJ dentro de la fase administrativa que puede catalogarse como un proceso de prevención de enriquecimiento ilícito; sin embargo, no es cierto que el objeto de este caso constituye el objeto principal del caso 124-A-2018, pues para el primero se refiere a la actuación que ejecuta la parte declarante, mientras que el segundo, hace alusión a la actuación que ejecuta la Sección de Probidad de la CSJ.

III. Finalizada la etapa de instrucción, se realizó la audiencia oral en la fecha y hora señalada, con la comparecencia del apelante y Giovanni Alberto Rosales Rosagni, quien se acreditó como apoderado administrativo con cláusula especial del ente obligado. En dicha actuación, las partes alegaron la existencia de incidentes para la realización de la audiencia. En primer lugar, la apelante y la CSJ presentaron la recusación del Comisionado **Juan Carlos Rodríguez Turcios**, por motivos referentes a la imparcialidad que debe revestir al decisor del caso al momento de resolver. Respecto de ello, previa deliberación, las Comisionadas y Comisionados del Instituto resolvieron por mayoría, ha lugar la recusación, fundamentándose en que, luego de revisar el portal de transparencia del MIGOBDT, se verificó que dentro de la estructura organizativa del Ministerio se encuentra la Dirección de Comunicaciones Institucional como dependencia directa del despacho lo cual se justificó lo convierte en un puesto de confianza por lo que, puede tomar decisiones dentro de sus funciones. Además, se relacionó jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional (Sentencia 1-2011 y Sentencia 56-2006) en cuanto a los cargos de confianza. En consecuencia, se llamó a su suplente, **Mauricio Edgardo Fuentes Oliva**, para que conociera del presente caso.

Por su parte, la CSJ interpuso un segundo incidente justificando en a que aún está pendiente de resolver el caso NUE 124-A-2018 por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, haciendo alusión a la medida cautelar emitida en ese proceso, la cual está relacionada con la reserva que se discute en este caso, por lo cual interpuso la prejudicialidad. En razón de ello, el Pleno deliberó y decidió por unanimidad declarar sin lugar el incidente planteado, fundamentando su decisión en la independencia que goza cada caso sobre la reserva que se alega, pese a que los argumentos versen sobre una misma declaratoria; para



ello, relacionó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Claude Reyes vs. Chile. Al respecto, el ente obligado manifestó su inconformidad con la decisión adoptada.

Superado lo anterior, se procedió a realizar la audiencia oral, con el ofrecimiento de prueba. En este acto, la apelante expresó que no ofrecería prueba; mientras que la CSJ, manifestó que ratifica la prueba ofertada en el informe de ley. Al respecto, el Pleno del Instituto resolvió admitir la documentación ofrecida por el ente obligado. Asimismo, según consta en el acta de audiencia oral, el apoderado de la CSJ solicitó una copia del video tomado en dicha audiencia.

Análisis del Caso

Para el desarrollo de la presente resolución es importante mencionar que en la prevención que consta a folio tres vuelto del expediente administrativo de la CSJ, la apelante manifestó que el cuarto requerimiento hace alusión a la “copia de las adendas que constan en el expediente de probidad del señor Nayib Armando Bukele (folio seis frente del expediente administrativo de la CSJ); sin embargo, en el escrito de apelación hizo alusión a la “versión pública de las adendas presentadas por Nayib Armando Bukele (...)”, es decir, ambas cuestiones responden a intervenciones distintas, ya que el primero, es más amplio que el segundo. Por lo que, tomando en cuenta que el ente decisor debe conocer sobre el fondo de lo pedido, en observancia al principio de congruencia, se decidirá sobre lo contemplado en el recurso que activó la competencia de este Instituto, lo cual no implica un cambio del objeto conocido por la CSJ sino una especificidad en la inconformidad de la apelante sobre lo resuelto.

Es así que, para resolver la controversia se analizará el caso de la siguiente manera: Breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP) (I); análisis de los requisitos de información reservada en relación al caso en estudio (II); y decisión sobre la clasificación de la información objeto de controversia (III).

I. En primer lugar, es preciso recordar que el DAIP tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, reconocida tanto por la jurisprudencia nacional como internacional. Por lo tanto, corresponde a este Instituto como garante de ese derecho, realizar la labor de armonización y determinación del alcance de tal derecho, así como la ponderación cuando este entre en colisión con otros derechos fundamentales o intereses legítimos, con cuya esfera de aplicación interactúa, especialmente cuando deba pronunciarse sobre la validez de restricciones a dicho derecho.

Ahora bien, el DAIP no es una prerrogativa absoluta, su interacción con otros derechos de igual rango posibilita escenarios de restricciones justificadas. En este sentido, la LAIP regula las limitantes para

acceder a la información, que en términos generales se clasifican en: la información reservada –art. 19-; información confidencial (en todas sus dimensiones) –art. 24-; y la información inexistente –art. 73-.

Por otro lado, toda restricción al DAIP debe analizarse ponderando el principio de máxima publicidad consagrado en el art. 4 de la LAIP; es decir, que toda la información en poder de las entidades obligadas es pública, salvo que cuente con algunas de las excepciones contempladas en la misma ley. En tal sentido, la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos ha establecido que los Estados tienen la carga de la prueba en demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión¹. También lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, al establecer que, “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”². Lo anterior, a efecto de generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo, en el establecimiento de restricciones al derecho³.

En este orden de ideas, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente, la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al DAIP, incluidos los supuestos de reserva de la información solicitada, como en el caso que nos ocupa.

Específicamente, para esta restricción –la reserva de información–, este Instituto ha señalado ciertos requisitos a cumplir, mismos que se amparan en los arts. 19, 20 y 21 de la LAIP y el análisis de cada uno de ellos, se encuentran directamente relacionados con el test o examen del daño; lo cual no es más que realizar un análisis comparativo entre el DAIP y el derecho –de igual rango–, que se pretende proteger con el fin de ponderar cuál de los dos derechos debe ceder. En este sentido, para que pueda operar la declaratoria de reserva, se necesita la concurrencia de tres requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad. A continuación, se ampliará en el análisis sobre estas.

En este punto, es importante advertir que la clasificación de la información, implica la existencia de la información en los archivos del ente obligado; es decir, que el acto de clasificación, el cual fue alegado

¹ Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 93.

² Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73º Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7.

³ Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. *Op.cit.*



en la resolución emitida por la oficial de información, conlleva implícitamente el reconocimiento de que los documentos requeridos existen y se encuentran en poder del ente; pues, resultaría imposible declarar la reserva de una información inexistente.

Tanto la inexistencia como la reserva son dos categorías que la LAIP regula en sus arts. 73 y 19, respectivamente; no obstante, dichas categorías son excluyentes entre sí; por lo que, es dable afirmar que una información reservada no puede ser inexistente, así como la información inexistente no puede ser declarada como reservada.

II. Habiendo detallado lo anterior, es oportuno analizar si la reserva alegada por el ente obligado cumple con los requisitos enunciados anteriormente. Para tales efectos, se estudiará cada uno de ellos:

(a) El primer requisito es el de **legalidad**, pues para que un ente obligado pueda reservar la información pública se debe analizar respecto al marco legal vigente, esto para garantizar que los límites al ejercicio de este derecho estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia; es decir, que la información solicitada encuadre en alguna de las causales de excepción al acceso a la información previstas en el artículo 19 de la LAIP; y, además, que cumpla con el procedimiento de clasificar información; es decir, que la declaratoria de reserva sea emitida por la persona competente para ello, tal como lo establece el art. 21 de la LAIP; 17, 27, 28 y 31 de su Reglamento (RELAIP) al reglar que la declaratoria debe ser emitida por el titular del ente obligado o aquel a quién se delegue.

Para el caso en análisis, la reserva se conoce bajo la causal del literal e) del art. 19 de la LAIP; es decir, “la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”.

De la prueba aportada por la **CSJ**, se advierte que en la resolución de Corte Plena de fecha 20 de junio de 2017, publicada en el portal de transparencia, únicamente se aborda el tema de la reserva de forma general, mas no se hace el análisis sobre las adendas ni del supuesto legal invocado. Además, es oportuno mencionar que, al verificar la resolución de Corte Plena de fecha 8 de agosto de 2019, se advierte que en dicho acto únicamente se aborda el posicionamiento de la **CSJ** respecto del cumplimiento a la resolución definitiva emitida por este Instituto para el caso NUE 124-A-2019, mas no se concibe el análisis al supuesto legal invocado. Por tanto, resulta imposible confirmar el cumplimiento de este requisito, en los términos o parámetros establecidos por la LAIP.

(b) El segundo requisito es el de **razonabilidad**. No basta con que el ente obligado cite disposiciones legales que lo habiliten a denegar la información por considerarla reservada, también es necesario que se razone y fundamente la adopción de una limitación al acceso a la información pública

[reguladas en el art. 21 de la LAIP]; con ello, se busca reducir la arbitrariedad de los funcionarios que tienen la potestad de clasificar la información y evitar denegaciones injustificadas o contrarias al DAIP.

En este punto, se debe analizar lo argumentado por el ente obligado, lo cual se basó –tal como lo manifestaron en su informe- en las mismas razones utilizadas para el caso NUE 124-A-2018; pues, relacionan la resolución de Corte Plena de fecha 8 de agosto de 2019. Respecto de esto, es oportuno hacer las siguientes valoraciones:

i. La **CSJ** en el apartado II de su informe de ley estableció cuál es el objeto de la apelación que nos ocupa, citando textualmente la delimitación efectuada en el auto de admisión del presente caso.

ii. La representación de la **CSJ** en la audiencia oral aclaró al pleno de Comisionadas y Comisionados que “adendas en el expediente de probidad” se entiende tanto las presentadas por el declarante como las que realiza la Sección a sus propios informes.

iii. La **CSJ** en su informe de ley no expuso los argumentos de hecho y de derecho de la clasificación de reserva de la información objeto de controversia del presente caso, misma que fue enfatizada en el apartado II de su informe. Por el contrario, se limitó a manifestar su posicionamiento respecto de los informes emitidos por la sección de probidad.

iv. En el señalamiento de audiencia oral, este Instituto se pronunció sobre el objeto de controversia, enfatizando que: “en ambos casos se solicitan versiones públicas que están relacionadas con el tema de enriquecimiento ilícito; sin embargo, tal como se explica en el informe de actualización invocado por el ente obligado (Fs. 56 y 57 del expediente NUE 124-A-2018), el procedimiento establecido se divide en dos fases: una administrativa y otra jurisdiccional; explicando que la fase administrativa está a cargo de la **CSJ**. Entonces, en esta fase se realizan una serie de actuaciones, tanto por la Sección de Probidad como por el (la) funcionario(a) declarante. La principal responsabilidad para la parte declarante es, claramente, presentar su declaración; no obstante, también se presentan adendas o actualizaciones a esta. Por otro lado, la Sección de Probidad realiza gestiones y emite informe, debiendo también emitir adenda o actualización de informe, según las pruebas de descargo que puedan presentarse”.

Además, es importante recalcar que la reserva alegada tiene como finalidad proteger las “opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, **en tanto no sea adoptada la decisión definitiva**”, se entiende que la condicionante que mantiene activa la reserva es la falta de adopción de una decisión definitiva; siendo este, el parámetro para denegar o no la información. Por tanto, una vez tomada la decisión, la reserva se desvanece pues es necesario tener presente que el efecto de esta clasificación es únicamente la exclusión temporal y justificada de la divulgación de lo solicitado, siendo dable afirmar que, bajo esta categoría, la información **no deja de ser pública**, solo se limita su entrega por una causa legalmente fundamentada.



En esta lógica, durante el procedimiento la CSJ presentó como prueba una copia certificada del informe suscrito por el Subjefe de la Sección de Probidad de la CSJ, con referencia 208-2019-SP, de fecha 13 de junio de 2019. En dicho informe, consta que en resolución del 11 de junio de 2018 se conoció sobre el caso de Nayib Armando Bukele Ortiz para el periodo de 2012-2015, cuando fungió como Alcalde Municipal de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, resolviendo que “no existen indicios de enriquecimiento ilícito”.

Por otro lado, para los períodos de 2015-2018, cuando fungió como Alcalde de San Salvador, y del 1 de junio de 2019 a la fecha, en su calidad de presidente de la República, consta en el expediente administrativo que no se han presentado las declaraciones de cese y toma de posesión, respectivamente; por ende, se entiende que no existe una decisión de Corte Plena respecto de esos períodos, siendo claro que la reserva debe adecuarse para estos casos.

Es preciso advertir, que las alegaciones y las pruebas presentadas se encuentran relacionadas con los argumentos planteados en el caso NUE 124-A-2018, tal como lo señaló el ente obligado a lo largo del procedimiento, cuyo objeto eran los informes elaborados por la sección de probidad de la CSJ, **pero no tiene relación con el presente**. Por ello, el ente obligado no ha defendido de forma específica y coherente la razón por el cual consideran que las adendas presentadas por Nayib Bukele deben restringirse al acceso del público, motivado en la protección de la deliberación final de la Corte Plena.

Es importante enfatizar que este Instituto tiene el deber de analizar de **manera independiente** cada declaratoria de reserva, sin importar que en un mismo acto se decida reservar varia documentación, sea esta específica o no; por lo que, no se puede basar la defensa de los argumentos esgrimidos en otro caso, cuando la información es distinta, como sucede en el presente procedimiento, pues el ente obligado se ha basado en una declaratoria que no analiza de manera específica las adendas y que durante el procedimiento no se singularizó los motivos de índole constitucional por el cual dichas adendas son reservadas; todo lo contrario, se continuó analizando un caso que, inclusive, ya cuenta con decisión de fondo por parte del LAIP.

Puesto que, para crear certeza sobre lo argumentado por el ente obligado, resulta indispensable la incorporación de prueba, **pertinente e idónea**, que respalde la reserva alegada. Además, este Instituto advierte que el ente obligado no ha realizado el test de daño (Art. 21 de la LAIP); pues en su alegación únicamente asevera una serie de circunstancias que no comprueban fehacientemente su relación indiscutible con la letra e) del Art. 19 de la LAIP. Realizar el test del daño es indispensable, pues el requisito de razonabilidad no se agota parafraseando la causal de reserva, sino que, como todo acto que emana de la administración pública, la motivación debe ser congruente entre la información que se está limitando su acceso con el interés o derechos que se pretenden proteger; de no ser así, la reserva carece de sustento.

En consecuencia, para el presente caso, se advierte que el proceso decisorio de clasificación emitido por la **CSJ**, no descansa en el principio de razonabilidad, pues no ha evaluado la idoneidad de la medida restrictiva, es decir, no ha sustentado la relación lógica de adecuación entre el medio restrictivo y el fin que se persigue.

Concretamente, el ente obligado no ha sustentado la razonabilidad de la reserva sobre la información objeto de controversia, al contrario, ha defendido un punto que no está incluido dentro del análisis del procedimiento y, dicha omisión, no es producto de confusión respecto de la información que se estudia en este acto; pues, el mismo ente señaló en su informe cuál es la delimitación del recurso de apelación.

(c) Por último, el tercer requisito es el de **temporalidad**; indica que la reserva debe alegarse por un tiempo determinado; pues su naturaleza no es permanente sino transitoria; ya que atiende escenarios circunstanciales, conservando su naturaleza pública. Por tanto, al desaparecer la causa que originó la reserva, queda habilitada la apertura de la información. Para tal efecto, el Art. 20 de la LAIP establece el plazo de la reserva, señalando, en principio, que la información se puede mantener en tal carácter hasta por un periodo de siete años.

En el presente caso, la **CSJ** no ha alegado un plazo para la reserva planteada; pues no hay un acto administrativo que decida coherentemente respecto de este requisito, teniendo como consecuencia su inobservancia.

III. En conclusión, se ha acreditado que la reserva de información para el caso en concreto va en contra del DAIP y resulta oportuno modificar la resolución emitida por la oficial de información interina; por lo que se debe entregar la información objeto de controversia.

Con la información a entregar, se debe tener especial cuidado con la forma de proporcionarla; pues esto no se traduce a que deba divulgarse sin algún tipo de matiz, ya que contienen datos personales sensibles, propios de la vida privada de sus titulares que solo atañen a ellos, tales como número de Documento Único de Identidad, Número de Identificación Tributaria, número de cuentas bancarias, cuotas alimenticias, entre otros, que deben ser protegidos. En consecuencia, dicha información deberá restringirse por motivos de confidencialidad ante terceros.

3. Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “c” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:



a) **Revocar** la resolución por la oficial de información interina de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, bajo la referencia UAIP/466/RR/1353/2019 (4) de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

b) **Ordenar** a la **CSJ** que, a través de su titular y en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, entregue a **Jessica Del Carmen Ávalos de Quinteros** la información relativa a la versión pública de las adendas presentadas por Nayib Armando Bukele ante la Sección de Probidad.

c) **Ordenar** al titular de la **Corte Suprema de Justicia** que, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento de los plazos anteriores, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la letra "b" de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada a la apelante, así como su recepción. Bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y la ejecución forzosa de conformidad al art. 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv


d) **Entregar** al apoderado de la **Corte Suprema de Justicia**, una copia del video de la audiencia oral relacionada con el presente procedimiento.

e) **Hace saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.


g) **Publicar** esta resolución oportunamente.

Notifíquese. -


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN

GC/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veinte días del mes de julio de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



